

C.A. de Santiago

Santiago, tres de noviembre de dos mil veintiuno

Visto y teniendo presente:

Primero: Que comparece don Fernando Garreaud Torres, abogado, en representación de la Caja de Compensación y Asignación Familiar La Araucana, quien interpone reclamo de ilegalidad por denegación de acceso a la información pública, en contra de la Fiscalía Metropolitana Occidente, representada por su Directora Ejecutiva Regional doña Rocío Berrios Ibáñez, la que denegó el acceso a la información pública solicitada, mediante Resolución Oficio Der (4) N° 019-2021, recaída en el Folio N°14263 de 20 de abril de 2021, notificada el 21 de abril de 2021.

Menciona como antecedentes previos y de contexto de su reclamo, que su representada dedujo una querrella el 7 de septiembre de 2013, ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago, Ruc 1300617484-6 y Rit 16722-2013, denunciando la obtención de créditos sociales por parte de funcionarios públicos de una repartición pública, mediante la utilización de certificados y liquidaciones de sueldo falsas, lo que motivó una investigación originalmente encabezada por la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, a cargo del Fiscal sr. Víctor Vidal, quien no obstante iniciar las pesquisas y solicitar audiencia de formalización, decide asimismo pedir la incompetencia del 7° Juzgado de Garantía, tramitándose una cuestión de inhibitoria al 9° Juzgado de Garantía, el que finalmente acepta la competencia en el año 2016, lo que trajo como consecuencia, que la causa pasara a la Fiscalía Occidente, y quedara a cargo del Fiscal don Juan Pablo Gormaz, bajo el Rit 2735-2016, manteniéndose el RUC original. Indica que se siguieron una serie de solicitudes del Ministerio Público, relativas a comunicación de decisión de no perseverar, oposición a reaperturas de investigación, solicitudes de prescripción de la acción penal, todas las que no fueron acogidas o revocadas, por el Juzgado de Garantía, como por la Corte de Apelaciones. En medio de aquello, uno de los imputados, -David Calderón Villagra-, fue detenido y formalizado en agosto de 2019 quedando, a solicitud del Fiscal, con medidas cautelares de arraigo y firma. Paralelamente, a nivel investigativo, se encontraban allegados todos los antecedentes falsificados y las declaraciones de los testigos que indagaron internamente la

recopilación de antecedentes, junto con las órdenes de investigar e instrucciones particulares, los que abonaban la tesis de un ilícito penal.

Agrega que, el 19 de marzo de 2021, el Tribunal de Garantía celebra audiencia programada para suspensión condicional, del imputado Calderón, la que se torna en comunicación de una decisión de no perseverar. Ese mismo día, su parte solicitó información a través de la plataforma SIAU, de la Fiscalía de Chile, acerca de la autorización de las jefaturas para proceder de aquella forma, la que fue respondida negativamente, pues la causa se encontraba vigente respecto de un imputado, lo que no era efectivo. Sostiene, que el 29 de marzo del señalado año, reiteró la solicitud, la que nuevamente fue rechazada, sin expresión de causa.

Aclara, que no es su interés revivir ni solicitar reapertura o reclamar un cierre injustificado, sino, conocer los antecedentes que la motivaron, esto es, aquellos con los que los fiscales titulares se encontraban autorizados administrativamente, para tomar esta decisión de término anticipado.

Relata, que en este contexto, en su calidad de abogado querellante, en representación de la Caja de Compensación La Araucana, en la causa RUC 1300617484-6, a cargo del Fiscal Sr. Gormáz, ingresó a la Fiscalía Transparente, el 31 de marzo de 2021, requiriendo se le entregaran los antecedentes asociados, a: 1.- existencia de una solicitud de autorización de decisión de no perseverar; 2.- en caso que la hubiere, copia de dicha solicitud con sus fundamentos y razones; 3.- copia de la autorización del Fiscal Regional; y 4.- copia de informes u opiniones de asesores legales de la Fiscalía Regional.

Expresa, que con fecha 20 de abril pasado, se dicta la resolución reclamada, que, a su juicio, resulta manifiestamente atentatoria a sus derechos, en orden a que transparenten los actos del organismo público a cargo de la persecución pública de delitos. Aduce, que la resolución se asila en la circunstancia que su parte no estaría haciendo una petición amparada por la ley que estatuye que toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información de cualquier órgano de la Administración de Estado, en la forma y condiciones allí previstas, sugiriendo que las solicitudes relacionadas con investigaciones penales en que una persona figure como interviniente,

deben ser efectuadas en la Fiscalía Local a cargo del caso y no a través de la ley N° 20.285.

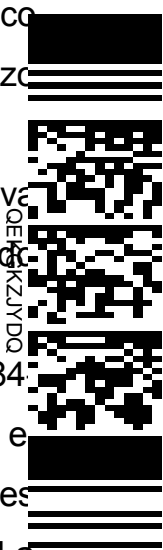
Luego, aduce, que el organismo reclamado sostiene la existencia del secreto de las investigaciones, fundado en el artículo 182 del Código Procesal Penal, lo que concuerda sería solo aplicable a terceros, sin embargo, no aplicaría a un interviniente, como es su caso. Y, por último, sustrae el asunto, del principal objeto de la solicitud, cual es, precisamente, el transparentar razones y fundamentos de una decisión. Cita al respecto los artículos 5°, 10° y 9° transitorios de la ley N° 20.285 y el artículo 8° inciso segundo de la Constitución Política de la República.

En conclusión, estima, que el oficio respuesta de la Fiscalía no ha respondido cabalmente a su petición, en términos de hacerse cargo del objeto y contenido de ella, y se ha negado a proporcionar la información sin indicar las razones que la motivan sustancialmente, y si bien señala razones, éstas son vagas, impertinentes y no obedecen a ninguna de las hipótesis contenidas en la ley N° 20.285.

Por lo anterior, pide tener por interpuesto reclamación de ilegalidad, contra de resolución de la Fiscalía Metropolitana Occidente, a través del OFICIO DER (4) N° 019-2021, de 20 de abril de 2021, notificada a su parte el 21 de abril de 2021, acogerla a tramitación, y en definitiva, declarar su ilegalidad y/o arbitrariedad, ordenando específicamente a la reclamada entregar los documentos e información, ya citados, asociados a la causa RUC 1300617484-6, enviándolos al correo electrónico fgarreaud@pkgabogados.cl, y conjuntamente a pgonzalezr@laaraucana.cl, en el plazo que se determine, por esta Corte.

Segundo: Que comparece doña Rocío Berríos Ibáñez, Directora Ejecutiva Regional de la Fiscalía Metropolitana Occidente, quien viene en evacuar el traslado conferido.

Refiere, en primer término, los antecedentes de la causa penal Ruc 1300617484-6, por delito de obtención fraudulenta de créditos, la que se inicia por denuncia, en el mes de junio de 2013, por hechos ocurridos durante los años 2012 y 2013, consistentes en la tramitación de créditos en distintas sucursales de la Caja de Compensación La



Araucana, por funcionarios de Sename, presentando liquidaciones de remuneraciones adulteradas en su monto, para lograr la obtención de dichos créditos.

Continúa relatando, que el 16 de septiembre de 2013, se interpuso por la Caja de Compensación y Asignación Familiar La Araucana, querella contra quienes resultaren responsables, ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago, solicitando el 1° de febrero de 2016 audiencia de formalización respecto de tres imputados. El 14 de marzo de 2016, el 7° Juzgado de Garantía se declara incompetente y remite los antecedentes al 9° Juzgado de Garantía de Santiago. Con fecha 12 de abril de 2017, este último, aceptó la competencia, y la causa fue traspasada de la Fiscalía Centro Norte a la Fiscalía Occidente. Con fecha 28 de junio de 2017 la Fiscalía solicitó audiencia para comunicar decisión de no perseverar, y el 5 de julio de 2017, en audiencia, se decreta la reapertura de la investigación a petición del querellante.

Posteriormente, el 28 de agosto de 2019, se realiza audiencia de formalización solo respecto del imputado David Calderón Villagra, y el 1° de diciembre de 2020, se declara la rebeldía y sobreseimiento temporal de los dos imputados no formalizados, Carlos Espinoza Morales y Rosario Vera Alarcón, decretándose el sobreseimiento definitivo por prescripción de la acción penal, el 23 de marzo de 2020, resolución que es revocada por esta Corte de Apelaciones. Con fecha 5 de noviembre de 2020, a la audiencia de suspensión condicional, no comparece el imputado Calderón Villagra, fijándose una nueva para el 19 de marzo de 2021, aumentando el plazo de investigación hasta dicha data. Se realiza la audiencia de suspensión condicional, la cual no fue aceptada por el imputado. En cuanto al aumento de plazo, el fiscal no persistió en su solicitud. Y, en atención al mérito de la causa, el fiscal Diego Leiva Carvajal comunicó cierre de la investigación y comunica decisión de no perseverar respecto de los tres imputados, sin perjuicio de los derechos de la querellante. El abogado querellante no ejerció dentro de plazo los derechos contemplados en los artículos 257 y 258 del Código Procesal Penal.

Argumenta respecto de los fundamentos que sostienen la legalidad del actuar de la Fiscalía Regional Occidente, exponiendo primeramente que el reclamo interpuesto, se vincula con dos peticiones anteriores realizadas por el reclamante, en la Fiscalía

Local de Maipú, una de 19 de marzo de 2021, mediante la cual solicita copia firmada de la autorización del Fiscal Regional respecto de ejercer en esta causa la decisión del artículo 248 c) del Código Procesal Penal, y la otra, de 29 de marzo del año en curso, en la que reitera la solicitud de documento de la causa, consistente en la solicitud administrativa de autorización del Fiscal adjunto para proceder conforme a la norma ya citada, y la autorización del Fiscal Regional.

Aclara, que en consecuencia, lo pedido por el reclamante son documentos escritos y firmados en que consten, en primer lugar, la solicitud efectuada por el Fiscal adjunto, de la consulta de autorización de la decisión de no perseverar en la causa RUC 13000617484-6, y en segundo lugar, la respuesta de autorización del Fiscal Regional a dicha decisión de no perseverar en el procedimiento.

Hace presente, que dichas peticiones fueron rechazadas por sistema SIAU, -que corresponde a la plataforma informática de acceso de los intervinientes en causas penales-, la primera, por cuanto la causa estaba vigente, respuesta que registra un error de hecho, debido a un problema de actualización de la información del estado de la causa, por cuanto, se había efectuado recientemente la audiencia de 19 de marzo de 2021, relativa a la comunicación de término de no perseverar en el procedimiento. Luego, en la segunda respuesta de la Fiscalía Local de Maipú, se informa correctamente que la causa se encuentra terminada con la decisión de no perseverar, y, que en la misma audiencia, se expusieron los antecedentes, -encontrándose presente el abogado querellante-, disponiéndose que aquello, era, sin perjuicio de otros derechos que le asistieran a dicha parte, dentro del plazo legal, de acuerdo a los artículos 257 y 258 del Código Procesal Penal.

Posteriormente, el abogado querellante, presentó solicitud de ley de transparencia, a fin de obtener el respaldo documental de las decisiones del fiscal adjunto y fiscal regional en relación a la causa RUC 1300617484-6, a lo que no se dio lugar, por no ser la vía procedente, siendo interviniente en la investigación penal, para lo cual, están los conductos formales del Código Procesal Penal, así como de ley especial.

Precisa, que el Reglamento sobre normas e instrucciones para dar cumplimiento a la ley N° 20.285, establece en su número 3° que toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información del Ministerio Público, de acuerdo a los principios, formas, condiciones, modalidades y oportunidad que establece la ley, salvo que concurra alguna de las causales de secreto o reserva, o que exista oposición del interesado. La finalidad de la norma, en comento, expresa, no es otra que poder acceder a información pública que proviene de las actuaciones del Ministerio Público, distinto escenario, se presenta si aquella información se vincula a una causa penal, como ocurre en este caso, en que las peticiones del reclamante dicen relación con una investigación penal, correspondiente a la causa RUC 1300617484-6, de la Fiscalía Local de Maipú, llevadas a cabo en su calidad de interviniente, como abogado querellante, conforme al artículo 12 del Código Procesal Penal, lo que implica la aplicación de un estatuto jurídico especializado, regulado por la normativa procesal penal, en la que se consagran los derechos y facultades que la misma ley le reconoce al querellante. En el caso concreto, y para las peticiones del querellante, están deben ser conducidas ante el Juzgado de Garantía, haciendo valer los derechos del artículo 257 del cuerpo legal antes indicado, -solicitud de reapertura de la investigación-, y de su artículo 258 –facultad de forzamiento de la acusación una vez formalizada la investigación y sustituirse en el rol de persecutor-. Todo lo que debe concretarse ante el Juzgado de Garantía, sin embargo, el abogado querellante Sr. Garreaud, no hizo uso de aquellas prerrogativas habiendo asistido a la audiencia del día 19 de marzo de 2021, ante el 9° Juzgado de Garantía de Santiago.

Recalca, que más aún, se debe tener presente, que el mismo artículo 109 del Código Procesal Penal, contempla los derechos de las víctimas, y en su letra dispone: *“Ser oída, si lo solicitare, por el tribunal antes de pronunciarse acerca del sobreseimiento temporal o definitivo u otra resolución que pusiere término a la causa.”*

Reitera, que en el acta de la audiencia en cuestión, consta en forma expresa, de acuerdo al registro de audio, que después de haber informado el defensor que el imputado David Calderón Villagra, no aceptaba la propuesta de suspensión condicional, el Fiscal, informó, que en virtud de las instrucciones de la Fiscalía Regional,

considerando el tiempo y las diligencias realizadas, adoptaría la decisión de no perseverar en el procedimiento, lo que fue complementado con la indicación de comunicación previa de la decisión del cierre de la investigación, dado la solicitud del mismo querellante, para fines de hacer ejercicio de sus facultades contempladas en la ley, en el artículo 257 del Código Procesal Penal. Agrega, que el abogado querellante reclamó de la decisión adoptada, ya que, aún por los motivos señalados de volumen de la causa y diligencias realizadas, debía la Fiscalía seguir adelante con la acusación, por cuanto, aquello lo dejaba en la absoluta indefensión, y que la decisión de forzar la acusación como querellante, no tenía buenos resultados de juicio oral, y que como abogado querellante no sabía si podía la misma querellante asumir esa carga procesal. Finalmente, se precisó que la decisión de término era respecto de todos los imputados de la causa. Así, refiere que el abogado querellante manifestó su sorpresa con la decisión adoptada, solicitando la información documental de la Fiscalía Regional, a lo que el fiscal respondió, que correspondía a una comunicación interna, y que lo que podía explicitar eran los argumentos de la decisión, como lo hizo.

Manifiesta, que habida cuenta que el abogado querellante ejerció los derechos procesales en audiencia de acuerdo lo previsto en el artículo 109 letra e) del Código Procesal Penal, no puede instrumentalizar el derecho a acceso a la información, para conocer los fundamentos que se ya expusieron en la audiencia judicial. Por lo demás, en otra anterior, ya se había discutido la comunicación de la decisión de no perseverar y con la oposición de la misma parte, se desestimó aquella, al acceder a la reapertura de la investigación.

Adicionalmente, indica, que el querellante, después del 19 de marzo de 2021 mantuvo sus derechos a solicitar la reapertura de la investigación o forzar la acusación ninguno de los cuales ejerció en plazo legal. En específico, dentro del ámbito procesal penal, tenía otro derecho, ya que, siendo interviniente, pudo presentar el reclamo contemplado en el artículo 32 letra b) y 33 de la ley N° 19.640, Orgánica Constitucional del Ministerio Público, respecto de la manifestación de su disconformidad con la decisión adoptada, como de las razones de la misma.

Añade, que la forma de proceder de la Fiscalía ha sido ajustada al objetivo y ámbito de competencia de la naturaleza de la ley invocada. En ningún caso considera que dichas peticiones no puedan ser formuladas, sino, que las solicitudes de un interviniente penal deben ser apegadas al procedimiento. No existe pretensión por su parte de generar un círculo vicioso para la tramitación, sino que aquellas deben ajustarse a la vía procesal, ya sea, de reclamo o presentación ante el superior el Fiscal Regional, a fin de revisar las actuaciones del Fiscal adjunto, mecanismo que permite dar las respuestas a un interviniente, y en este caso, al ejercicio de una decisión facultativa de término procesal penal.

Respecto de la naturaleza jurídica de lo requerido, dice, que aquellas comunicaciones son efectuadas por correo electrónico, lo que no corresponde a actos administrativos, y tampoco son piezas o elementos que formen parte o integren la carpeta de investigación penal. Lo anterior, se condice con lo dispuesto en las instrucciones generales impartidas por el Fiscal Nacional en Oficio FN N°060/2014, de 23 de enero de 2014, que a propósito del registro de la investigación, señala, que no están obligados a dar copia a los intervinientes de documentación consistente en comunicaciones entre éste y sus superiores, pares o personal colaborador, así como todo antecedente de carácter epistolar que de cuenta de actuaciones, opiniones o instrucciones de carácter administrativo.

Cita jurisprudencia del Tribunal Constitucional en orden a que no toda información que obre en poder de los órganos del Estado es pública. Por lo mismo estima que los correos electrónicos no constituyen actos ni resoluciones, sino que corresponden a las comunicaciones internas que dan cuenta del análisis de aprobar o no por parte del Fiscal Regional, una decisión de término. Asimismo, argumenta que los correos electrónicos son reservados, considerando la garantía constitucional de artículo 19 N°5 de la Constitución Política de la República.

Finalmente, en cuanto a la solicitud de acceso al respaldo documental de los informes jurídicos de los asesores legales, señala que en esta causa no existen informes de dicha naturaleza emitidos por asesor jurídico, que tenga el carácter de tal.

Concluye, expresando que el órgano requerido no ha incurrido en ilegalidad alguna al denegar lo solicitado por la reclamante en su requerimiento folio N°14.263, toda vez, que su actuar se apegó íntegramente a la ley N° 20.285, por lo que solicita desestimar el reclamo, al no corresponder a la vía de procedencia de acceso a dicha información, como tampoco a una de carácter público, sino que a actuaciones dentro del ámbito del proceso penal. Por lo demás, en cuanto a la naturaleza de dicha información, que se materializa en correos electrónicos, aduce, que éstos corresponden a comunicaciones internas entre fiscales adjuntos y fiscal regional y/o abogado asesor, que no tienen la naturaleza de acto administrativo.

Tercero: Que previo, es menester consignar que la Constitución Política de la República, señala, en su artículo 8°, que *“son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional”*.

También, la Constitución Política de la República, en su artículo 19 N° 12, asegura el derecho de acceso a la información pública como una manifestación de la libertad de información, en que la publicidad es la regla y el secreto la excepción, obligando a dar a conocer sus actos decisorios a todos los órganos del Estado, en sus contenidos y fundamentos, obrando con la mayor transparencia posible en los procedimientos a su cargo, lo que se relaciona con el derecho de las personas a ser informadas.

No obstante lo anotado, la publicidad de los actos y resoluciones de los órganos del Estado tiene excepciones, las que se encuentran contempladas en forma explícita taxativa en la Constitución, y dicen relación con los valores y derechos que la publicidad pudiere afectar, y que sólo el legislador de quórum calificado puede configurar. De manera, que la interpretación de dichas excepciones debe efectuarse restrictivamente.

Cuarto: Que por su parte, la ley N° 20.285, de Acceso a la Información Pública en su artículo 3°, dispone que la función pública se ejerce con transparencia, de modo,

que permita y promueva el conocimiento de los procedimientos, contenidos y decisiones que se adopten en ejercicio de ella.

En su artículo 4° inciso segundo, previene que *“el principio de transparencia de la función pública consiste en respetar y cautelar la publicidad de los actos, resoluciones, procedimientos y documentos de la Administración, así como la de sus fundamentos, y en facilitar el acceso de cualquier persona a esa información, a través de los medios y procedimientos que al efecto establezca la ley”*.

En su artículo 5° inciso primero, preceptúa: *“En virtud del principio de transparencia de la función pública, los actos y resoluciones de los órganos de la Administración del Estado, sus fundamentos, los documentos que les sirvan de sustento o complemento directo y esencial, y los procedimientos que se utilicen para su dictación, son públicos, salvo las excepciones que establece esta ley y las previstas en otras leyes de quórum calificado. Asimismo, es pública la información elaborada con presupuesto público y toda otra información que obre en poder de los órganos de la Administración, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, a menos que esté sujeta a las excepciones señaladas”*.

Y en su artículo 21, señala las únicas causales de secreto o reserva, por las que se puede denegar total o parcialmente el acceso a la información, entre ellas: *“a) si es en desmedro de la prevención, investigación y persecución de un crimen o simple delito o se trate de antecedentes necesarios a defensas jurídicas y judiciales.”*

Quinto: Que en este orden normativo, la ley N° 19.640, Orgánica Constitucional del Ministerio Público, en su artículo 1°, lo define como un organismo autónomo y jerarquizado, entre cuyas funciones –en lo que interesa al caso-, se encuentra aquella de adoptar las medidas para proteger a las víctimas y a los testigos.

Mientras que el artículo 17, enuncia aquellas que corresponden al Fisco Nacional, como el fijar oyendo previamente al Consejo General, los criterios de actuación del Ministerio Público para el cumplimiento de los objetivos establecidos en la Constitución y las leyes, dictando las instrucciones generales que estime necesarias para el adecuado cumplimiento de las tareas de dirección de la investigación de los hechos punibles, ejercicio de la acción penal y protección de las víctimas y testigos, así



como: “b) Fijar, oyendo al Consejo General, los criterios que se aplicarán en materia de recursos humanos, de remuneraciones, de inversiones, de gastos de los fondos respectivos, de planificación del desarrollo y de administración y finanzas; c) Crear, previo informe del Consejo General, unidades especializadas para colaborar con los fiscales a cargo de la investigación de determinados delitos; d) Dictar los reglamentos que correspondan en virtud de la superintendencia directiva, correccional y económica que la confiere la Constitución Política. En el ejercicio de esta facultad, determinará la forma de funcionamiento de las fiscalías y demás unidades del Ministerio Público y el ejercicio de la potestad disciplinaria correspondiente.”

Y en su artículo 8° estatuye, que los fiscales y los funcionarios del Ministerio Público deberán observar el principio de probidad administrativa, ejerciendo la función pública con transparencia, de manera que permita y promueva el conocimiento de los procedimientos, contenidos y fundamentos de las decisiones que se adopten en ejercicio de ella. Puntualizando expresamente en su inciso cuarto, que “Son públicos los actos administrativos del Ministerio Público, y los documentos que les sirvan de sustento o complemento directo y esencial. Con todo, se podrá denegar la entrega de documentos o antecedentes requeridos en virtud de las siguientes causales: la reserva o secreto establecidos en disposiciones legales o reglamentarias, cuando la publicidad impida o entorpezca el debido cumplimiento de las funciones del organismo....”.

Sexto: Que de los antecedentes de autos consta que la información solicitada por el reclamante, recibida en la Fiscalía Metropolitana Occidente, es del tenor siguiente: “1.- existencia de una solicitud de autorización de decisión de no perseverar; 2.- en caso de que la hubiere, una copia de dicha solicitud con sus fundamentos y razones; 3.- copia de la autorización del Fiscal Regional; 4.- copia de informes y opiniones de asesores legales de la Fiscalía Regional.”

Séptimo: Que la Fiscalía Metropolitana Occidente, al respecto, rechazó la solicitud, argumentando que lo pedido se relaciona con investigaciones penales en las que el actor es parte interviniente, para lo cual, debe, entonces, dirigirse a la Fiscalía Local a cargo del caso, planteando su requerimiento por la página web de esta institución, y no a través de la ley N° 20.285, atendido lo dispuesto en el artículo 182 del

Código Procesal Penal, el que estatuye que los intervinientes pueden examinar y obtener copias de los registros y documentos de la investigación fiscal.

Al efecto, aduce, al evacuar el traslado conferido en relación al presente reclamo, que no ha existido un rechazo al acceso a la información de manera infundada, o para afectar o atentar los derechos del querellante o no dar respuesta seria o dilatar indebidamente la tramitación, sino que más bien da cuenta que la forma de proceder de la Fiscalía, ha sido aquella de ajustarse al objetivo y ámbito de competencia de la naturaleza de la ley invocada, sin negar la facultad de ser formuladas, sino, solo que para un interviniente penal, sus peticiones deben apegarse al procedimiento penal.

Octavo: Que en su libelo, el reclamante, refiere que lo pretendido con su solicitud, es la entrega de las consideraciones que la Fiscalía tuvo en vista para adoptar una decisión administrativa la que posteriormente judicializa, y por ende, concluye, que tendría el carácter de pública, y por lo mismo, le sería aplicable la Ley de Transparencia, y sus disposiciones, y el artículo 8° inciso segundo, de la Constitución Política de la República, mientras que la reserva del artículo 182 del Código Procesal Penal, solo aplicaría a terceros y no a un interviniente.

Noveno: Que como se ha venido relacionando, el contexto de la solicitud del reclamante, se motiva ante la decisión de no perseverar en el procedimiento, del Ministerio Público, en una causa penal, en la que el primero participa como querellante, arguyendo, que solo busca conocer los antecedentes administrativos que autorizaron a los fiscales titulares, para tomar dicha decisión de término anticipado.

Décimo: Que ahora bien, el reclamo en contra de la decisión de la Fiscalía Metropolitana Occidente, no es un recurso de alzada, ni de fondo, sino, que una reclamación por decisiones ilegales, que la referida hubiere cometido en la dictación de la resolución motivo de la reclamación, motivo por el cual, lo que ha de verificarse en la revisión, es la eventual existencia de las supuestas infracciones normativas que se esgrimen en contra de aquella.

Undécimo: Que al tenor de las normas citadas de la ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público, y el marco legal reseñado en los motivos anteriores, aparece que si bien son públicos los actos administrativos del Ministerio Público y los documentos

que le sirvan de sustento, se podrá denegar la entrega de éstos, en virtud de la reserva o secreto, cuando la publicidad impida o entorpezca el debido cumplimiento de las funciones del organismo. Reserva que se encuentra directamente relacionada con las funciones del Fiscal Nacional y Consejo General, a los que corresponde fijar, – entre otros-, según lo preceptúa el artículo 17 de la ley N° 19.640, los criterios de actuación del Ministerio Público para el cumplimiento de los objetivos establecidos en la Constitución y las leyes, y en delitos de conmoción social, determinando salidas alternativas, e instrucciones generales relativas a las diligencias inmediatas para la investigación de los mismos, pudiendo establecerse orientaciones diferenciadas para su persecución en las diversas regiones del país. Incumbiendo, al Fiscal Nacional, dictar las instrucciones generales para el adecuado cumplimiento de las tareas de dirección de la investigación de los hechos punibles, ejercicio de la acción penal y protección de las víctimas y testigos.

Duodécimo: Que consecuente con lo relacionado, en este caso la información solicitada por el reclamante, no trata sobre material sujeto a reserva en razón de las normas antes referidas, sino sobre las eventuales directrices por las que el Ministerio Público habría tomado la decisión de no perseverar en un procedimiento penal, asunto, que corresponde a un acto procesal, regido por normas especiales, las que de cumplirse, provocan la resolución pertinente de parte del órgano resolutor competente, pudiendo el afectado ejercer en contra de la misma, las acciones o recursos, que la ley le confiere dentro del proceso.

De lo que se infiere, que los acuerdos tomados por la Fiscalía, y que condujeron a la adopción de no perseverar en el procedimiento de marras, constituyen un medio por el cual el servicio plasma sus posiciones en el pleito, de acuerdo al estado procesal de la causa se lo permita, lo que deviene en una materia que no involucra o llega a constituir un acto administrativo, por el solo hecho de emanar de un ente público, sino de una actuación en el marco de una contienda judicial, en la que tanto el ente público como el reclamante, son partes intervinientes en la misma.

De modo tal, que la adopción de la medida de no perseverar, al darse los supuestos previstos en la norma legal, corresponden al desarrollo y cumplimiento de



las tareas, que, como parte, conciernen a la Fiscalía, lo que no importa la necesidad de la expresión de una motivación especial, más allá del cumplimiento de los requisitos procesales y desarrollo de las justificaciones legales al tenor de la norma que se impone como aplicable al caso, de acuerdo el estado de la causa, como ya se ha dicho. Todo ello, sin perjuicio de los derechos que le asisten al resto de los intervinientes, conforme a las reglas de derecho sustantivo y procesales.

Décimo tercero: Que consecuente con lo reseñado, la información requerida por el actor, no constituye una de aquellas tratadas en la ley N° 20.285, sino en el conocimiento de comunicaciones internas relativas a estados procesales de una causa, las que se materializan en las presentaciones ante el órgano judicial llamado a calificar y resolver, siendo inconcuso, entonces, que los aspectos internos del estudio de los antecedentes que llevaron a la Fiscalía a plasmar la decisión en comento, no revisten la naturaleza de un acto administrativo, sino una presentación procesal, motivada en el contexto de un procedimiento penal, acorde el estado procesal de la causa, y sometida a la apreciación jurídica y resolución del Juez competente. De lo que ha de concluirse, que el desarrollo de la toma de decisión, se encuentra vinculada y dice relación con la norma procesal que informa el momento procesal en el que se encuentra el juicio, y el cumplimiento de los requisitos legales impuestos al efecto, por lo que, no es posible considerarla en el carácter de información pública amparada bajo las normas de la Ley de Transparencia, y artículo 8° de la Carta Fundamental.

Y aún, en el caso de considerar, como lo estima el reclamante, que las instrucciones impartidas por los fiscales jefes, en relación a la conducción de la causa, fueren catalogadas como administrativas, éstas constituyen comunicaciones que pueden incluir opiniones, análisis, discusiones o deliberaciones previas a la adopción de resoluciones, medidas o políticas, en el seno de la autoridad superior dotada de privilegio deliberativo en el proceso de toma de decisiones, las que muchas veces no se materializan en actos concretos, por lo que, se encuentran al amparo de la norma establecida en el artículo 8° inciso cuarto de la ley N° 19.640.

Consecuente, con ello, la información solicitada, respecto de las deliberaciones y comunicaciones de la Fiscalía en torno a la decisión que se cuestiona, en razón de

constituir éstas acuerdos sobre estrategias jurídicas e instrucciones impartidas dentro de un proceso judicial determinado, son propias del desarrollo y cumplimiento de las tareas que la ley entrega al Ministerio Público, y como tal, de acuerdo lo preceptuado en el artículo 21 de la ley N° 20.285, constituye causal de secreto o reserva, en cuya virtud puede denegarse el acceso a la información, ante el riesgo de afectarse el debido cumplimiento de las funciones de la institución. Reserva que se encuentra amparada, asimismo, en el ya citado artículo 8° inciso cuarto de la ley N° 19.640.

Décimo cuarto: Que acorde se ha venido razonando, el Ministerio Público, ha actuado con apego a la Constitución Política, y a la ley en el ejercicio de sus funciones, encontrándose su OFICIO DER (4) N° 019-2021, de 20 de abril de 2021, notificado con fecha 21 de abril de 2021, ajustada a derecho.

Por estas consideraciones, citas legales, y lo previsto en la ley N° 20.529, **se rechaza** el reclamo de ilegalidad deducido por don Fernando Garreaud Torres, en su calidad de representante de la Caja de Compensación y Asignación Familiar La Araucana, en contra de la Fiscalía Metropolitana Occidente, sin costas.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción de la Ministro sra. Duran Madina

Ingreso Corte N° 249-2021 Contencioso Administrativo.



Pronunciado por la Segunda Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Gloria Maria Solis R., Inelie Duran M. y Abogado Integrante David Peralta A. Santiago, tres de noviembre de dos mil veintiuno.

En Santiago, a tres de noviembre de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl> o en la tramitación de la causa.

A contar del 05 de septiembre de 2021, la hora visualizada corresponde al horario de verano establecido en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más información consulte <http://www.horaoficial.cl>.